

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, dieciocho (18) de julio de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por VERÓNICA CECILIA CATAÑO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-014-2012-00287-01). Se integró en calidad de litisconsortes necesarios por pasiva a DUVAN AVENDAÑO CATAÑO y LIZETH JHOANA AVENDAÑO MESA y en calidad de interviniente excluyente a SILVIA LUZ MESA LONDOÑO (fls.49-50).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge Fabián Antonio Avendaño Pérez a partir del 18 de agosto de 2009, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Tales aspiraciones las fundamentó con base a los siguientes hechos: Contrajo matrimonio con Fabián Antonio Avendaño el 23 de mayo de 1993 de cuya unión procrearon dos hijos, uno de ellos ya fallecido, y el otro, menor de edad. El 18 de agosto 2009 Fabián Antonio falleció. El 08 de octubre de 2009 presentó reclamación ante Colpensiones para obtener el reconocimiento y

pago de la pensión de sobrevivientes en nombre propio y el de su hijo Duvan Avendaño, prestación negada mediante Resolución N° 004447 del 20 de marzo de 2010 por no encontrar debidamente acreditada la convivencia, siendo concedida a Duvan y Lizeth Avendaño el 50%. El 10 de mayo de 2010 se interpusieron los recursos de ley insistiendo en la negativa.

COLPENSIONES aceptó la mayoría de los hechos expuestos, aseverando la improcedencia del derecho por no estar demostrada la convivencia. Formuló los medios exceptivos de fondo que denominó Indebida integración del litisconsorte, inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas, prescripción, compensación y buena fe del seguro social.

Mediante auto fechado del 03 de julio de 2012, el Juzgado de conocimiento dispuso vincular como litis consortes necesarios por pasiva a Duvan Avendaño Cataño y Lizeth Avendaño Mesa y como interviniente excluyente a Silvia Luz Mesa Londoño (fls. 49-50).

Lizeth Avendaño Mesa representada por Curador Ad Litem designado por el Juzgado, se pronunció con aceptación a los hechos del libelo sin oposición.

Duvan Avendaño Cataño por intermedio de apoderado judicial dio respuesta a la demanda, aceptando cada uno de los fundamentos fácticos expuestos sin desacuerdo frente a las pretensiones ni formulación de excepciones.

Silvia Mesa Londoño pese a ser notificada en debida forma del auto que procedió con su vinculación, se abstuvo de comparecer al proceso, continuándose con el trámite respectivo por tratarse de una intervención facultativa - artículo 63 CGP-.

Surtido el trámite de rigor, el 09 de junio de 2021 el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia, en la que DECLARÓ que a la demandante le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge con ocasión del fallecimiento de Fabián Antonio Avendaño Pérez. CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar a la demandante el 50% de la mesada pensional en el rango del salario mínimo a partir de la ejecutoria de

la sentencia. CONDENÓ a Colpensiones a que, a partir del 22 de julio de 2021, fecha en que cumple 25 años Lizeth Avendaño Mesa, se acreciente el derecho a Duvan Avendaño Cataño siempre que acredite estudios hasta sus 25 años, momento en el que acrecentará el derecho de la demandante en un 100%. CONDENÓ a la demandada a indexar las mesadas pensionales causadas, correspondiéndole el derecho con base a 14 mesadas anuales, AUTORIZANDO el descuento por los aportes en Salud. ABSOLVIÓ a Colpensiones de las demás pretensiones. CONDENÓ en costas a la demandada, fijando por agencias en derecho el equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El mandatario judicial de la demandante aspira que se modifique la decisión, en cuanto considera que la prestación debe reconocerse desde su causación, ya que cuando se emitió la Resolución a través de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 004447 del 20 de marzo de 2010, la sentencia judicial que dispuso el derecho de la cónyuge con acreditación de una convivencia de 5 años en cualquier tiempo ya se encontraba vigente, la que no fue puesta en consideración por la entidad, por lo que la prestación debe reconocerse desde el fallecimiento por lo menos, en un 25% conforme se ha dispuesto en sentencias como la SL 540-2021 al tratarse el porcentaje concedido a Lizeth Avendaño de grupos familiares independientes. Señaló que de ello se deriva la mala fe de la demandada, por lo que también proceden los intereses de mora.

Por su parte, Duvan Avendaño Cataño también formuló recurso afirmando que en el asunto no se da el efecto liberatorio que se aduce en la providencia, toda vez que al tratarse de grupos familiares distintos, a Verónica le corresponde el 75% del valor de la mesada y no del 50%, atendiendo que Colpensiones nunca debió levantar la reserva del 50% por encontrarse a esa data en discusión el derecho de la demandante.

La Sala igualmente en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor de la Colpensiones.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Fabián Antonio Avendaño Pérez como afiliado al RPMPD falleció por causas de origen común el 18 de agosto de 2009 (fl. 26), dejando causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, por contar a la muerte con más de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores al óbito (fl. Archivo 20 Exp. Admvo). Que por medio de la Resolución N° 004447 del 20 de marzo de 2010 fue concedido el 50% de la pensión de sobrevivientes a los menores Lizeth y Duvan Avendaño (fls. 17-18), misma equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, decisión modificada por Acto Administrativo N° 030675 del 15 de noviembre de 2011 en la que se otorgó el 50% a cada uno de los hijos menores (fl. 22-23), acogida en la Resolución N° 015261 del 29 de mayo de 2012 en la que se resolvió la apelación formulada por Verónica Cecilia Cataño, por no convivir con el causante los 5 años anteriores a la muerte (Exp. Admvo).

Acorde a lo anterior y a los argumentos de las alzadas, a más de la revisión en consulta de la providencia, el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a establecer si VERÓNICA CECILIA CATAÑO acredita en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de cónyuge de la pensión de sobrevivientes con causa de la muerte del afiliado FABIÁN ANTONIO AVENDAÑO PÉREZ ocurrida el 18 de agosto de 2009. De ser ello así, habrá de definirse la fecha desde la cual debe concederse el retroactivo pensional y si hay lugar a los intereses moratorios deprecados o en subsidio suyo, la indexación.

Pues bien, para resolver se tiene que la normatividad aplicable es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido la muerte de Fabián Antonio Avendaño Pérez el 18 de agosto de 2009, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de

sobrevivientes deprecada, que en su literal a) señala como beneficiarios de la prestación *“en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”*.

Ahora bien, para quien pretenda ser beneficiaria (o) de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante independientemente de sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021); con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

Adicionalmente, dadas las circunstancias específicas del caso la H. Corte Suprema de Justicia también en su interpretación literal de la norma, le dio una especial relevancia al concepto de unión conyugal y en ese sentido, privilegió el derecho del cónyuge a recibir la pensión de sobrevivientes, aun cuando estuviera separado de hecho del causante durante sus últimos años de vida, incluso, sin mediar un compañero o compañera permanente, siempre y cuando acredite una convivencia real y efectiva durante el lapso de cinco años, pero no necesariamente anteriores al deceso, sino en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en

virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social, pero naturalmente presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte vínculo afectivo, comunicación solidaria y ayuda mutua que permita considerar que los lazos familiares siguieron vigentes, señalándose por la Corporación en sentencias como la SL1869-2020 y la SL2015-2021 que ello se configura en un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b) artículo 13 Ley 797 de 2003, ya que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido, contenido e interpretación que encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto.

Se clarificó por la alta Corporación que tal postura se predica también para cuando no existe compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, en la medida que no sería proporcional privar a la (el) esposa (o) del reconocimiento de la pensión, en el evento de no concurrir aquel supuesto.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con el fallecido Avendaño Pérez una convivencia ininterrumpida de por lo menos 5 años en cualquier tiempo, encontrándose debidamente acreditada la calidad de cónyuge de la actora por medio del registro civil de matrimonio y la partida de ese rito (Exp. Admvo).

Para tal efecto, fue recepcionada la prueba la testimonial compuesta por HERIBERTO JARAMILLO DUARTE JHONY ALFREDO ECHEVERRI ECHEVERRI y SANDRA MILENA ACEVEDO, quienes coincidieron en advertir la continuada y permanente convivencia con el ánimo de forjar una comunidad de vida, presentada entre la pareja desde que acaeció el matrimonio en mayo de 1993 y hasta meses antes de ocurrir el deceso de Fabián Avendaño en agosto de 2009 cuando se presentó una separación por inconvenientes familiares con la madre del causante, quien a su vez fungía como propietaria del bien inmueble donde residía la pareja con sus hijos, y aunque fueron alegadas razones sobre circunstancias ajenas a la voluntad de las partes para

darse ese alejamiento sin voluntad de dar fin al vínculo, lo previo evidencia de forma patente y suficiente sin necesidad de argumentos adicionales en esta instancia, la satisfacción de parte de Verónica Cecilia Cataño del requisito de convivencia, por estar probado que se dio de forma lineal y sin interrupciones bajo el concepto de familia con el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de ser real efectiva y afectiva por más de 15 años, pues lo que habilita su derecho como cónyuge con quien se dio una separación de cuerpos, es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial, dejándose sentado que no estuvieron presentes figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal.

De modo que, para esta Sala de Decisión Laboral la convivencia en el sentido estricto impuesto por el legislador y la jurisprudencia queda demostrada, así como la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de la demandante en su calidad de cónyuge.

Ahora, siendo indiscutido que la causación del derecho se dio al momento de ocurrir la contingencia, el *a quo* acudiendo a la teoría del “efecto liberatorio” adujo que Colpensiones por haber sufragado de buena fe la prestación a los menores hijos del fallecido, se liberaba de reconocer a Verónica Cecilia Cataño el retroactivo desde la data de la muerte, e impone su pago a partir de la fecha de la ejecutoria de la providencia.

Al respecto, se tiene que en efecto, la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, ha dispuesto que de acuerdo con las particularidades de cada caso, el efecto liberatorio de la obligación de la administradora respecto de cada una de las mesadas canceladas previamente, habilita la posibilidad de que, aun cuando el derecho se causa al momento de la fecha de fallecimiento, el pago de la misma, se inicie en fecha diferente, lo que se da en eventos como cuando las mesadas efectivamente canceladas por el Fondo lo fueron a favor de un miembro del mismo grupo familiar de quien demanda, por tener la posibilidad de beneficiarse de tales pagos, en virtud de actuar como representante legal del menor a quien le fue reconocida la prestación (Ver SL540-2021, 1019-2021, SL5316-2021).

En este caso, patente es que Verónica Cecilia Cataño como beneficiaria también de la prestación por muerte, tenía derecho al 50% en su calidad de cónyuge, correspondiéndole a su menor hijo otro 25%, habiendo percibido el valor restante la señorita Lizeth Avendaño Mesa representada por su madre Silvia Luz Mesa Londoño, por lo que en resumen, Verónica recibió y efectuó el cobro total de forma mensual de un 50% de esa asignación pensional, cuando lo debió hacer por el 75%, discurso que permite aducir que el efecto liberatorio definido por la Alta Corporación en nuestra especialidad se produjo sobre el 50% reconocido al menor Avendaño Cataño, pero no ocurre lo mismo sobre el restante 25%, por haber sido concedido a quien no se halla incluido en el grupo familiar de la promotora del juicio y por lo tanto, la demandante no se benefició de ese pago.

Conviene agregar que no es viable entender que la entrega del 100% se procuró con la creencia innegable de la demandada estar adjudicando la prestación a quienes fungían como beneficiarios y que solo posteriormente, haya surgido la reclamación de uno nuevo, nótese que desde la petición inicial la demandante buscó su derecho, dejándose incluso desprovisto un 50% por estarse frente a dos personas alegando por un lado, su calidad de cónyuge, y por otro, el de compañera, lo que deja ver que la entidad ha debido suspender el pago del 50% de la prestación mientras se resolvía judicialmente el derecho controvertido como había ocurrido acorde a lo plasmado en la Resolución N° 004447 del 20 de marzo de 2010 (fls. 10), sin que existan razones para que posterior a ello, dentro de la definición de un recurso, se dispusiera sobre el 100% de la pensión.

De modo que, la demandante debe recibir desde el mismo momento de la causación y que corresponde al del deceso, el 25% de la prestación sobre el que no se liberó la pasiva, y a partir de la ejecutoria de la decisión habrá de recibir de Colpensiones su derecho en un 50% pues previo a ello las mesadas han sido efectivamente cubiertas en favor de un miembro de su mismo grupo familiar, teniendo esta la posibilidad de disfrutar de tales pagos hasta la fecha, cuantía que recibirá hasta tanto le sea posible el acrecimiento de su mesada pensional por el límite de edad y requisitos de estudios que por disposición legal se tiene dispuesta para los hijos beneficiarios de este tributo, 25 años que

Duvan Avendaño alcanza el 01 de septiembre de 2025, edad a la que arribó Lizeth Jhoana Avendaño Mesa el 22 de julio de 2021 (Exp. Admvo), data desde la que la mesada pensional de Duvan Avendaño corresponde al 50% que ha venido percibiendo.

Valga decir, que en el asunto no se presente el fenómeno de la prescripción, en tanto la muerte ocurrió el 18 de agosto de 2009 (fl. 26), la reclamación administrativa se efectuó el 08 de octubre de 2009 (fl. 10), y la demanda fue presentada el 15 de marzo de 2012 (fl. 9), sin haberse dejado transcurrir el término trienal que emerge de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Bajo tales reflexiones y atendiendo el salario mínimo legal mensual vigente reconocido como monto de la prestación por la entidad, el valor de las mesadas a pagar desde el 18 de agosto de 2009 y hasta el 31 de mayo de 2022 con base en 14 mesadas anuales corresponde a \$123.758.293 como se detalla a continuación, monto del que deben descontarse las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud, en atención a los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993, 26 del Decreto 806 de 1998 y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia SL 7061-2016, debiéndose continuar pagando a partir del 01 de junio de 2022 la suma mensual de \$250.000 equivalente al 25% de la prestación, y a partir de la ejecutoria de la decisión debe reconocerse el 50% del salario mínimo legal mensual vigente que para el año 2022 asciende a \$500.000 sin perjuicio de los incrementos de ley, y del futuro acrecimiento por pérdida del derecho que se presente en el caso de DUVAN AVENDAÑO CATAÑO acorde a lo estipulado en el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

AÑO	VR. MESADA	PORCENTAJE	Nº MESADA	TOTAL
2009	\$ 496.900	\$ 124.225	5,43	\$ 2.698.167
2010	\$ 515.000	\$ 128.750	14	\$ 7.210.000
2011	\$ 535.600	\$ 133.900	14	\$ 7.498.400
2012	\$ 566.700	\$ 141.675	14	\$ 7.933.800
2013	\$ 589.500	\$ 147.375	14	\$ 8.253.000
2014	\$ 616.000	\$ 154.000	14	\$ 8.624.000
2015	\$ 644.350	\$ 161.088	14	\$ 9.020.900
2016	\$ 689.455	\$ 172.364	14	\$ 9.652.370
2017	\$ 737.717	\$ 184.429	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	\$ 195.311	14	\$ 10.937.388

2019	\$ 828.116	\$ 207.029	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	\$ 219.451	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	\$ 227.132	14	\$ 12.719.364
2022	\$1.000.000	\$ 250.000	5	\$ 5.000.000
			TOTAL	\$ 123.758.293

Sobre los intereses de mora deprecados, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la administradora en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Así, se tiene que la pensión de sobrevivientes que se concede al polo activo de esta acción proviene de una posición jurisprudencial que no es vinculante para la administradora y en este sentido, no resulta razonable imponer la condena de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues claramente su negativa inicial y su oposición a las pretensiones de la demanda obedecieron al respeto de una normativa o posición que de manera alguna puede considerarse arbitraria. Además que lo presentado en su oportunidad fue una controversia de beneficiarias que se hacía susceptible de ser definido en sede judicial.

No obstante, habrá de ordenarse la indexación de la condena, que no es una condena en sí misma considerada, sino que con ella se surte la corrección monetaria a fin de solucionar el detrimento económico cuando no se pagan oportunamente las prestaciones del Sistema sin miramientos de la buena o mala fe de las partes. Indexación que deberá ser calculada hasta el momento del pago efectivo de la obligación que aquí se impone frente a cada mesada.

Conforme a todo lo expuesto, se procederá a modificar la sentencia de primera instancia venida en apelación y consulta en cuanto a la forma en que debe ser reconocido el retroactivo pensional a la demandante, y se confirmará en lo demás, incluidas las costas procesales impuestas.

En esta instancia no se causaron costas por la prosperidad parcial de los recursos.

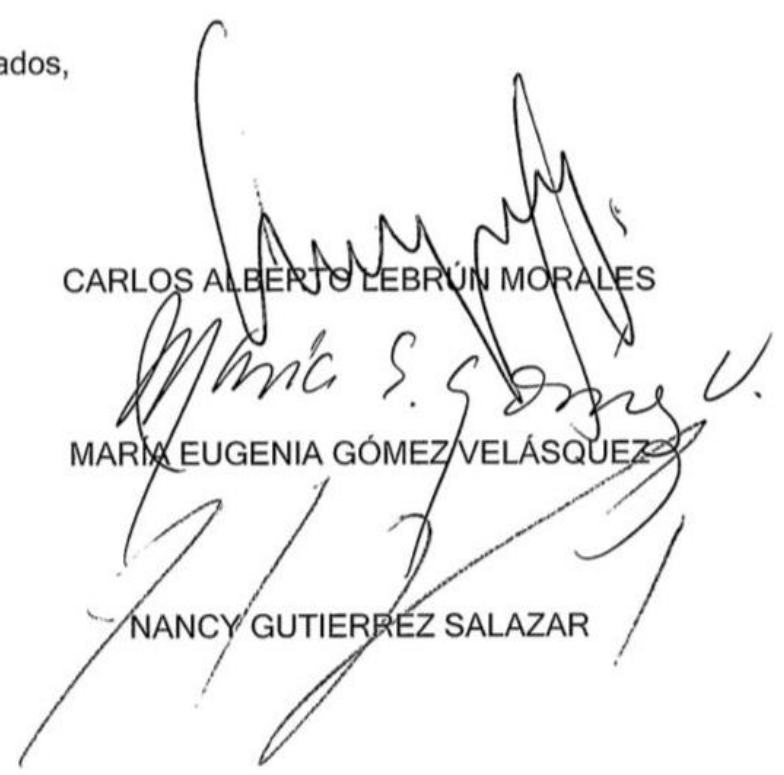
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **MODIFICA** la sentencia venida en apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas, en el entendido que Colpensiones debe reconocer a la demandante un retroactivo pensional calculado entre el 18 de agosto de 2009 y hasta el 31 de mayo de 2022 con base en 14 mesadas anuales de \$123.758.293, el cual deberá indexarse, monto del que deben descontarse las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud, debiéndose continuar reconociendo a partir del 01 de junio de 2022 una mesada por valor de \$250.000 y a partir de la ejecutoria de esta decisión habrá de percibir de Colpensiones la suma de \$500.000 correspondiente al 50% de la pensión, sin perjuicio de los incrementos de ley y el acrecimiento pensional por pérdida del derecho de su hijo Duvan Avendaño Cataño. **CONFIRMA** en los demás.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501420120028701
Proceso: Ordinario
Demandante: VERONICA CECILIA CATAÑO
Demandado: COLPENSIONES
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 18/07/2022
Decisión: CONFIRMA Y MODIFICA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 19/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario